

## DEMOCRACIA E IGUALDAD EN NUESTRA GLOBALIZACION

David Ibarra  
28 de abril de 2004

El mundo avanza y cambia, a veces para mejorar, otras para empeorar y casi siempre alterando la naturaleza de los problemas. En lo medular, los dilemas mundiales ya no son los de la guerra y la paz en conflictos generalizados; tampoco los de la disyuntiva entre dictadura y democracia, si se excluyen contadísimas excepciones.

Al implantarse la democracia liberal en la mayor parte de los países y disolverse las fronteras económicas, las cuestiones a resolver se asocian a la posibilidad de establecer normas jurídicas benévolas y universales que legitimen las acciones de la potencia dominante. La segunda cuestión relevante, a la que dedico este artículo, es la de preservar la cohesión nacional de las naciones periféricas ante fuerzas que constriñen la capacidad de acción de los gobiernos frente a sus responsabilidades.

Algunos ven el ascenso de globalización y de la democracia como un proceso seguro de erradicación a la pobreza, si hay reformas que profundicen a la propia globalización. La modernización política, se postula como indispensable, aunque se le quiera limitar el campo electoral, ante el temor a los posibles males de la dictadura de las mayorías, implícita en el rechazo a la participación ciudadana en el diseño de las políticas socioeconómicas.

En el lado opuesto del debate se sitúan quienes ven en la globalización un conjunto de fuerzas que a la par de favorecer la subordinación de buena parte del mundo, debilitan los impulsos al crecimiento, difunden pobreza y desigualdad, adentro y entre países.

La realidad no está en ninguno de esos extremos. Hay países periféricos que han prosperado, sacado ventajas de la integración de los mercados universales, conservado márgenes importantes de autonomía, mientras otros, los latinoamericanos, experimentan retroceso en el proceso de crecimiento, disparidades distributivas acentuadas y desprestigio en sus avances democráticos.

Hay algo que se está haciendo mal en nuestras latitudes y que se resuelve con buena fortuna en España, Irlanda y muchos otros países asiáticos. Se pasan por alto los trastornos asociados al profundo cambio en el patrón de desarrollo que permuta los grupos de ganadores y perdedores, las responsabilidades asignadas al mercado y a los gobernantes, creando incertidumbre en los negocios y dificultades en los acuerdos políticos. En México hasta 1980, el Estado tenía el papel protagónico en el desarrollo y en el logro de los equilibrios sociales internos. A partir de ahí los gobiernos ceden funciones al mercado y han de ocuparse de atender tanto los compromisos internos como, y por encima de ellos, los contraídos con la comunidad internacional. La fuente de desarrollo deja de ser el mercado propio, aunque el comercio exterior no asuma a plenitud ese papel por no estar vertebrado al resto de la economía. En vez de la prosperidad nacional y luego el intercambio; hoy se alienta el comercio del que surgirá algún día la prosperidad nacional.

Hay creación y destrucción simultánea de valores, instituciones y normas que inevitablemente trastocan los sistemas económicos y la cohesión social. Volverlos a la normalidad, demanda de tiempo y acciones deliberadas para compensar las dislocaciones del acomodo transicional. Las expectativas esperanzadas puestas en la globalización llevaron a caer en dos olvidos. El primero a suponer, como en los textos de la ortodoxia económica, que los ajustes

transicionales son atemporales, instantáneos; que se puede pasar sin pausa ni costos de la sustitución de importaciones al crecimiento exportador. Segundo, a ceder soberanía económica más de la cuenta, no sólo la derivada en convenios y acuerdos de comercio, sino la implícita en la renuncia al uso de los principales instrumentos de la política económica, sin anticipar las necesidades de adaptación del sistema productivo nacional.

Se suprimió indiscriminadamente el proteccionismo, es decir, el uso de las políticas industriales y de balanza de pagos. Luego se procedió a la liberación financiera interna y externa, eliminando los mecanismos de canalización selectiva del crédito, las regulaciones a las tasas de interés y los subsidios financieros. Como resultado y careciéndose de políticas de reconversión productiva y de regulaciones prudenciales, se abrieron las puertas a la destrucción de la pequeña y mediana industria, así como a la debacle bancaria que por largo tiempo originará pesadas cargas al erario público.

Otro paso en la misma dirección fue el otorgamiento de autonomía al banco central que le responsabiliza únicamente de la estabilidad de precios, no del empleo o el crecimiento. No se sabe si la autonomía frente al Estado significa libertad en el uso de los instrumentos estabilizadores, o libertad para abrazar sin cortapisas sus propias metas, en cuyo caso surgirían posibles contradicciones con las políticas económicas del resto del gobierno.

El círculo reductor de la política económica se cierra cuando se suscribe el criterio de equilibrar el presupuesto en cualquier circunstancia, reforzado por el hecho de que el bajo ritmo de crecimiento genera recaudaciones magras que reducen todavía más las capacidades estatales de acción.

Trasladadas a la esfera de la política, el estancamiento, la incapacidad de crear ocupaciones, la desigualdad, explican la enorme brecha entre crear oportunidades de participación electoral y la capacidad efectiva de reducir las disparidades sociales. Los indicadores muestran una situación dramática. La pobreza afecta al 50% de las familias, el trabajo informal absorbe al 40% de la fuerza de trabajo, los ciudadanos que viven con dos dólares o menos al día representan el 24% de las propias familias. A diferencia de España, y de varios países asiáticos, la incorporación a los mercados globalizados en vez de llevar fortalecimiento de las políticas sociales, se asoció aquí al empobrecimiento de la población.

Hasta ahora, la transición se ha conducido como si la política, la economía y la sociedad no tuviesen relación entre sí. La ausencia de crecimiento e igualdad genera costos, imposibles de ser compensados por la simple alternancia en el Poder Ejecutivo al dejarse sin variación las mismas políticas económicas. La democracia significa lucha inescapable por la igualdad. La injusticia en la distribución del ingreso, en las oportunidades de ascenso social afectan la calidad, la legitimidad, del régimen político.